



CICIG Comisión
Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala



**ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA
RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA
COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
(CICIG)**

**AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE STATE OF
GUATEMALA ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL
COMMISSION AGAINST IMPUNITY IN GUATEMALA
(CICIG)**



**ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA
RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA
COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG)**

La Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala,

Considerando que el Estado de Guatemala, tiene compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos para implementar mecanismos efectivos para proteger estos derechos, conforme la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universales reconocidos,

Considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena; todo lo cual conduce al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país,

Considerando que el Gobierno de la República de Guatemala, se obligó en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 22 de marzo de 1994 a combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos de seguridad con el propósito de que éstos ya no existan, asumiendo además la obligación de *“garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos”* y que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, el Estado está legalmente obligado a cumplir dichos compromisos.

Considerando que de conformidad al artículo 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, dicha organización promueve el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, y que los Estados miembros se comprometen a tomar medidas en cooperación con la misma para dicho propósito,

Considerando el acuerdo político de 13 de marzo de 2003 y *addendum* entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, sobre el establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala,

Considerando la carta de 4 de abril de 2003 del Gobierno de Guatemala en la que solicitaba la asistencia de la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de estos grupos, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad,

Considerando que, como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la implementación de un Acuerdo de carácter internacional en materia de Derechos Humanos que cree mecanismos efectivos de combate a la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, la cual afecta gravemente los derechos humanos fundamentales,

Considerando que el establecimiento de dicha Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en adelante CICIG, reforzará la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes de las convenciones de derechos humanos de que es parte y sus compromisos contraídos con arreglos al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de marzo de 1994,

Considerando además que el Secretario General y el Gobierno de Guatemala han celebrado negociaciones para el establecimiento de la CICIG, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente de conformidad con los términos de este Acuerdo,

Han convenido, en consecuencia, lo siguiente:

Artículo 1. Objetivos del Acuerdo.

1. El presente Acuerdo tiene como objetivos fundamentales:

(a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexas con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos;

(b) Crear los mecanismos y procedimientos necesarios, que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. Lo anterior de conformidad con los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en materia de protección de los derechos fundamentales, y de los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte;

(c) Para dichos efectos, se crea una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, los compromisos del Estado establecidos en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos y especialmente en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos artículos IV.1 y VII.3;

(d) Para efectos del presente Acuerdo, se deberá entender por Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las siguientes características:

(i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos.

(ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

2. La CICIG realizará las actividades indicadas en el numeral anterior de conformidad con la legislación de Guatemala y lo regulado por el presente Acuerdo.

Artículo 2. Funciones de la Comisión

1. Para lograr los propósitos y finalidades indicadas, por el presente instrumento, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

(a) Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad con los objetivos del presente Acuerdo;

(b) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

(c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

2. La CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato.

Artículo 3. Facultades de la Comisión

1. Para lograr el cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará facultada para:

(a) Recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados;

(b) Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes. De igual manea la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales, para todos los casos en el marco de su competencia;

(c) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, así como asesorar a los organismos del Estado en la implementación de los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a dichas organizaciones;

(d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometidos presuntamente infracciones administrativas, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente; en particular a aquellos funcionarios o empleados públicos presuntos responsables de obstaculizar el ejercicio de las funciones o facultades de la Comisión, sin perjuicio de promover a través del Ministerio Público cualquier proceso penal que sea pertinente;

(e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios administrativos, mencionados precedentemente;

(f) Suscribir e implementar Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la institución del Procurador de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y cualesquiera otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de su mandato;

(g) Garantizar confidencialidad a las personas que participen en las funciones y facultades que tiene la Comisión conforme al presente artículo, ya sea en calidad de testigos, víctimas, peritos o colaboradores;

(h) Solicitar en el marco del cumplimiento de su mandato, a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas; declaraciones, documentos, informes y colaboración en general, estando éstos obligados a entender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido:

(i) Solicitar al Ministerio Público y al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación así como monitorear, en conformidad a su mandato, la implementación y cumplimiento de dichas medidas, asesorar a los entes públicos encargados y ejercer buenos oficios respecto de la adopción de las mismas;

(j) Seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral y al personal administrativo necesario para cumplir con sus tareas;

(k) Tomar todas las medidas que estime convenientes para la consecución de su mandato de conformidad con el ordenamiento constitucional guatemalteco; y

(l) Publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los resultados de las mismas, incluyendo recomendaciones de conformidad con su mandato.

Artículo 4. Personalidad jurídica y capacidad legal.

1. A partir de la ratificación del presente acuerdo la CICIG poseerá personalidad jurídica y capacidad legal para:

(a) Celebrar contratos;

(b) Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;

(c) Iniciar procedimientos judiciales; y

(d) Cualquier otra acción autorizada por la legislación guatemalteca para la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos.

2. La CICIG tendrá la facultad de concertar acuerdos con otros Estados y organizaciones internacionales en la medida en que puedan ser necesarios para la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones, con arreglo al presente Acuerdo.

Artículo 5. Composición y estructura orgánica.

1. La CICIG estará integrada por un/a Comisionado/a, el personal especializado que sea pertinente y una Secretaría.

(a) El Comisionado/a, designado/a por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, será el responsable general de las actividades de la CICIG, representando a la Comisión ante el Gobierno de Guatemala, ante otros Estados y organizaciones locales e internacionales. Deberá ser jurista y poseer un alto nivel de competencia profesional en esferas directamente relacionadas con el mandato de la CICIG, particularmente los derechos humanos, el derecho penal y el derecho internacional, así como poseer una amplia experiencia en la investigación y el combate a la impunidad. El Comisionado/a informará periódicamente sobre las actividades de esta Comisión al Secretario General de las Naciones Unidas.

(b) El Personal internacional y nacional contratado por el Comisionado/a incluirá profesionales y técnicos especializados con experiencia en la realización de investigaciones en la esfera de los derechos humanos y podrá incluir investigadores, expertos forenses y expertos en tecnología de la información, entre otros.

(c) Una Secretaría que estará a cargo de un funcionario internacional quien tendrá la administración general. La Secretaría funcionará bajo la autoridad general y dirección del Comisionado/a.

Artículo 6. Cooperación con la CICIG.

1. El Gobierno de la República proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de la CICIG de conformidad con el ordenamiento jurídico y garantizará, en particular, a sus miembros:

(a) Libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala;

(b) Libertad de acceso sin restricción alguna a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares y a todos los establecimientos penitenciarios y de detención sin previo aviso, observando lo que para el efecto preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala;

(c) Libertad de reunirse y entrevistar a cualquier persona o grupo de personas, con inclusión de funcionarios del Estado, personal militar y de policía, dirigentes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y cualquier persona cuyo testimonio se considere necesario para el desempeño de su mandato;

(d) Libre acceso a la información y material documental que guarde relación con la investigación, los archivos oficiales, las bases de datos y los registros públicos y cualquier informe semejante, archivo, documento o información en posesión de las personas o entidades estatales pertinentes, ya sean civiles o militares, con observancia de lo prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala.

2. Para el cumplimiento de las finalidades de este Acuerdo, de conformidad con la legislación vigente y con los acuerdos bilaterales de cooperación que se suscriban:

(a) El Fiscal General del Ministerio Público dispondrá el nombramiento de los fiscales especiales que sean necesarios, así como las acciones pertinentes para cumplir con los finalidades de la investigación y la persecución penal, en particular para los siguientes efectos:

(i) Contar con personal idóneo para desarrollar las actividades materia del presente acuerdo;

(ii) Realizar las diligencias pertinentes en la investigación penal y la persecución penal;

(iii) Recibir asesoría técnica de la CICIG y demás acciones de fortalecimiento que sean necesarias; y

(iv) Mantener la adecuada coordinación para todos los efectos de este acuerdo, y en particular para el ejercicio de las atribuciones que el mismo confiere a la CICIG como querellante adhesivo.

(b) La Policía Nacional Civil dispondrá la creación de las respectivas unidades policiales de apoyo a la investigación a cargo del Ministerio Público.

3. El Organismo Ejecutivo presentará al Congreso de la República de Guatemala y promoverá, un conjunto de reformas legislativas, necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema guatemalteco de investigación y procesamiento judicial. Estas propuestas de reformas legales serán elaboradas en consulta con representantes de instituciones del Estado de Guatemala y Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala y de Naciones Unidas, con el fin de poner el sistema legal de Guatemala en conformidad con las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 7. Gastos de la CICIG.

1. Los gastos de la CICIG se sufragarán con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional.

2. El Ejecutivo facilitará a la CICIG los locales para sus oficinas y las demás instalaciones que ésta requiera para desarrollar apropiadamente sus funciones.

Artículo 8. Seguridad y protección del personal de CICIG.

1. El Gobierno de Guatemala adoptará todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas a que se hace referencia en el presente Acuerdo.

2. El Gobierno garantizará asimismo la seguridad de las víctimas, los testigos y cualquier persona que colabore con la CICIG, mientras dure su mandato y después que finalice su labor en Guatemala.

Artículo 9. Inviolabilidad de los locales y documentos; exenciones fiscales.

1. Los locales, documentos y materiales de la CICIG serán inviolables. Los bienes inmuebles, los fondos y los activos de la Comisión no podrán ser objeto de registro, allanamiento, confiscación, secuestro, requisición y expropiación.

2. La CICIG, sus fondos, haberes, ingresos y otros bienes:

(a) Estarán exentos de todo impuesto directo. No obstante, quedará entendido que la CICIG no reclamará la exención de los impuestos que, en la práctica, constituyan cobros de servicios de utilidad pública;

(b) Estarán exentos de toda clase de impuestos a los bienes que importe la CICIG para su uso oficial. Quedará entendido, sin embargo, que los artículos que se importen con arreglo a esas exenciones no podrán venderse en Guatemala salvo con arreglo a las condiciones que se acuerden con el Gobierno; y

(c) Asimismo estarán exentos de impuestos a la importación y exportación de sus publicaciones.

Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la CICIG.

1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En particular, disfrutará:

(a) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros;

(b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena;

(c) Inviolabilidad de cualesquiera papeles y documentos;

(d) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros;

(e) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje propio o personal que la Convención de Viena concede a los agentes diplomáticos; y

(f) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y prestaciones;

2. El personal internacional disfrutará de los privilegios e inmunidades otorgados a los expertos en misiones de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En particular, disfrutarán de:

(a) Inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación de su equipaje personal;

(b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG;

(c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;

(d) Las mismas inmunidades y facilidades respecto a sus equipajes personales acordadas a los enviados diplomáticos; y

(e) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario, emolumentos y prestaciones.

3. Los privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la CICIG se otorgan en atención a los intereses de la Comisión y no al beneficio personal de los individuos en cuestión. El derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad, cuando ello proceda sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada, requiere, en cuanto al Comisionado/a, la autorización del Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso del personal de la CICIG, del Comisionado/a.

4. El Gobierno proporcionará a la CICIG y a su personal, en todo Guatemala, la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades y se compromete a velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.

Artículo 11. Retiro de la cooperación.

La Organización de Naciones Unidas se reserva el derecho de determinar su cooperación con el Estado:

(a) Si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades;

(b) Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad, en el período de mandato de la CICIG; y/o

(c) Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.

Artículo 12. Solución de controversias.

Toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación de l presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido.

Artículo 14. Entrada en vigencia y duración.

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha en que el Estado de Guatemala notifique oficialmente a la Organización de Naciones Unidas, que ha completado sus procedimientos internos de aprobación y ratificación. Tendrá una vigencia de dos (2) años y podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes.

Artículo 15. Modificación.

El presente instrumento se podrá modificar por acuerdo escrito entre las partes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los siguientes representantes debidamente autorizados por la Organización de Naciones Unidas y por el Gobierno de Guatemala han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006, en dos originales Inglés y Español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la Organización de Naciones Unidas

Por el Gobierno de Guatemala



AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE STATE OF GUATEMALA ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL COMMISSION AGAINST IMPUNITY IN GUATEMALA (CICIG)

The United Nations and the State of Guatemala,

Considering that it is the duty of the State of Guatemala to protect the right to life and personal integrity of and provide effective judicial redress for all the inhabitants of the country,

Considering that the State of Guatemala has assumed international human rights commitments to establish effective mechanisms for the protection of human rights pursuant to the Charter of the United Nations, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms,

Considering that illegal security groups and clandestine security organizations seriously threaten human rights as a result of their criminal activities and capacity to act with impunity, defined as the de facto or de jure absence of criminal, administrative, disciplinary or civil responsibility and the ability to avoid investigation or punishment, all of which weaken the rule of law, impeding the ability of the State to fulfil its obligation to guarantee the protection of the life and physical integrity of its citizens and provide full access to justice, with the resulting loss of confidence of citizens in the democratic institutions of the country,

Considering that the Government of the Republic of Guatemala undertook under the Comprehensive Agreement of Human Rights of 22 March 1994 to combat illegal security groups and clandestine security organizations with the aim of assuring that such forces and organizations no longer exist and, additionally, assumed the obligation to “effectively guarantee and protect the work of human rights defenders and organizations” and that, in accordance with the Framework Law of the Peace Agreements, the State is legally bound to honour these commitments,

Considering that pursuant to articles 55 and 56 of its Charter, the United Nations promotes respect for human rights and fundamental freedoms for all and Member States pledge themselves to take action in cooperation with the Organization for the achievement of that purpose,

Considering the political agreement of 13 March 2003 and its addendum between the Minister of Foreign Affairs of Guatemala and the Human Rights Ombudsman on the establishment of a Commission to Investigate Illegal Groups and Clandestine Security Organizations in Guatemala,

Considering the 4 April 2003 letter of the Government of Guatemala requesting assistance from the United Nations for the establishment and operation of an investigatory commission to assist with the investigation and dismantling of illegal security groups and clandestine security organizations,

Considering the above, therefore, it is necessary to implement an international agreement on human rights that would establish mechanisms to effectively combat the impunity produced by illegal security groups and clandestine security organizations that seriously undermines fundamental human rights,

Considering that the establishment of an International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) will strengthen the capacity of the State of Guatemala to effectively fulfil its obligations under the human rights conventions to which it is a party and its commitments under the Comprehensive Agreement on Human Rights of 29 March 1994,

Further considering that the Secretary-General and the Government of Guatemala have carried out negotiations towards the establishment of CICIG, as a non-UN organ, functioning solely in accordance with the provisions of this agreement,

Have therefore agreed as follows:

Article 1. Purpose of the Agreement

1. The fundamental objectives of this Agreement are:

(a) To support, strengthen and assist institutions of the State of Guatemala responsible for investigating and prosecuting crimes allegedly committed in connection with the activities of illegal security forces and clandestine security organizations and any other criminal conduct related to these entities operating in the country, as well as identifying their structures, activities, modes of operation and sources of financing and promoting the dismantling of these organizations and the prosecution of individuals involved in their activities.

(b) To establish such mechanisms and procedures as may be necessary for the protection of the right to life and to personal integrity pursuant to the international commitments of the State of Guatemala with respect to the protection of fundamental rights and to international instruments to which Guatemala is a party;

(c) To that end, an International Commission Against Impunity in Guatemala shall be established pursuant to the provisions of this Agreement and the commitments of the State

under national and international human rights instruments, in particular the Comprehensive Agreement on Human Rights, sections IV, paragraph 1, and VII, paragraph 3;

(d) For the purposes of this Agreement, illegal security groups and clandestine security organizations shall mean those groups that:

(i) commit illegal acts in order to affect the full enjoyment and exercise of civil and political rights and

(ii) are linked directly or indirectly to agents of the State or have the capacity to generate impunity for their illegal actions.

2. CICIG shall carry out the activities mentioned in the above section in accordance with Guatemalan law and the provisions of this Agreement.

Article 2. Functions of the Commission

1. In order for this instrument to achieve the above-mentioned purposes and objectives, the Commission shall have the following functions:

(a) Determine the existence of illegal security groups and clandestine security organizations, their structure, forms of operation, sources of financing and possible relation to State entities or agents and other sectors that threaten civil and political rights in Guatemala, in conformity with the objectives of this Agreement.

(b) Collaborate with the State in the dismantling of illegal security groups and clandestine security organizations and promote the investigation, criminal prosecution and punishment of those crimes committed by their members;

(c) Recommend to the State the adoption of public policies for eradicating clandestine security organizations and illegal security groups and preventing their re-emergence, including the legal and institutional reforms necessary to achieve this goal.

2. CICIG shall enjoy complete functional Independence in discharging its mandate.

Article 3. Powers of the Commission

1. In order to discharge its mandate, the Commission shall have the power to:

(a) Collect, evaluate and classify information provided by any person, official or private entity, non-governmental organization, international organization and the authorities of other States;

(b) Promote criminal prosecutions by filing criminal complaints with the relevant authorities. The Commission may also, in accordance with this Agreement and the Code of Criminal Procedure, join a criminal proceeding as a private prosecutor (querellante adhesivo) with respect to all cases within its jurisdiction;

(c) Provide technical advice to the relevant State institutions in the investigation and criminal prosecution of crimes committed by presumed members of illegal security groups and clandestine security organizations and advise State bodies in the implementation of such administrative proceedings as may be required against state officials allegedly involved in such organizations;

(d) Report to the relevant administrative authorities the names of civil servants who in the exercise of their duties have allegedly committed administrative offences so that the proper administrative proceedings may be initiated, especially those civil servants or public employees accused of interfering with the Commission's exercise of its functions or powers, without prejudice to any criminal proceedings that may be instituted through the Office of the Public Prosecutor;

(e) Act as an interested third party in the administrative disciplinary proceedings referred to above;

(f) Enter into and implement cooperation agreements with the Office of the Public Prosecutor, the Supreme Court, the Office of the Human Rights Ombudsman, the National Civilian Police and any other State institutions for the purposes of carrying out its mandate;

(g) Guarantee confidentiality to those who assist the Commission in discharging its functions under this article, whether as witnesses, victims, experts or collaborators;

(h) Request, under the terms of its mandate, statements, documents, reports and cooperation in general from any official or administrative authority of the State and any decentralized autonomous or semi-autonomous State entity, and such officials or authorities are obligated to comply with such request without delay;

(i) Request the Office of the Public Prosecutor and the Government to adopt measures necessary to ensure the safety of witnesses, victims and all those who assist in its investigations, offer its good offices and advice to the relevant State authorities with respect to the adoption of such measures, and monitor their implementation;

(j) Request and supervise an investigation team made up of national and foreign professionals of proven competence and moral integrity, as well as such administrative staff as is required to accomplish its tasks;

(k) Take all such measures it may deem necessary for the discharge of its mandate, subject to and in accordance with the provisions of the Guatemalan Constitution; and

(l) Publish general and thematic reports on its activities and the result thereof, including recommendations pursuant to its mandate;

Article 4. Legal personality and capacity

1. Upon ratification of this Agreement, CICIG shall have the legal personality and capacity to:

(a) Enter into contracts;

(b) Acquire and dispose of movable and immovable property;

(c) Institute legal proceedings; and

(d) Take such other actions as may be authorized under Guatemalan law in order to carry out its activities and fulfil its mandate.

2. CICIG shall have the capacity to enter into agreements with other States and international organizations to the extent that they may be necessary for the implementation of its activities and fulfillment of its functions under this Agreement.

Article 5. Composition and organizational structure

1. CICIG shall be composed of a Commissioner, such specialized staff as may be required and a secretariat.

(a) The Commissioner, appointed by the Secretary-General of the United Nations, shall have overall responsibility for the activities of CICIG and represent the Commission before the Government of Guatemala, other States and local and international organizations. He or she shall be a jurist with a high level of professional competence in the areas directly related to the mandate of CICIG, particularly human rights, criminal law and international law, and must also have extensive experience in the investigation of and fight against impunity. The Commissioner shall submit periodic reports on the activities of CICIG to the United Nations Secretary-General.

(b) The international and national personnel recruited by the Commissioner shall include professionals and specialized technicians with expertise in carrying out investigations in the field of human rights and may include, inter alia, investigators forensic experts and experts in information technology.

(c) The secretariat shall be headed by an international official, who shall be responsible for the general administration. The secretariat shall operate under the overall authority and direction of the Commissioner.

Article 6. Cooperation with CICIG

1. The Government of Guatemala shall provide CICIG with all the assistance necessary for the discharge of its functions and activities, in conformity with Guatemalan law, and shall ensure, in particular, that its members enjoy:

(a) Freedom of movement without restriction throughout Guatemalan territory;

(b) Freedom of access without restriction to all State locations, establishments and installations, both civilian and military, as well as to all penitentiaries and detention facilities without prior notice, in accordance with and subject to the relevant provisions of Guatemalan Constitution;

(c) Freedom to meet and interview any individual or group of individuals, including State officials, military and police personnel, community leaders, non-governmental organizations, private institutions and any persons whose testimony is deemed necessary for the discharge of its mandate;

(d) Free access to information and documentary material that has a bearing on its investigations, official archives, databases and public records and any similar report, archive, document or information in possession of the relevant persons or entities, whether civilian or military, in accordance with and subject to the relevant provisions of the Guatemalan Constitution.

2. In order to fulfil the purposes of this Agreement, and in accordance with Guatemalan legislation and bilateral cooperation agreements in force:

(a) The Public Prosecutor shall appoint such special prosecutors and take all other relevant actions as may be necessary to carry out investigations and criminal prosecutions, in particular in order to:

(i) Rely upon professional staff qualified to carry out the activities which are the subject of this Agreement;

(ii) Carry out relevant procedures for criminal investigations and prosecutions;

(iii) Receive technical assistance and other support from CICIG to strengthen the capacity of the Office of the Public Prosecutor;

(iv) Maintain adequate coordination with CICIG for the purposes of this Agreement, in particular facilitating CICIG's exercise of its role as private prosecutor (querellante adhesivo);

(b) The National Civilian Police will facilitate the creation of special police units to support the investigations of the Public Prosecutor.

3. The Executive Branch shall submit to the Congress of Guatemala and shall promote a series of legislative reforms required to ensure the proper functioning of the Guatemalan criminal investigation and judicial prosecution system. Such proposals for legislative reform shall be developed in consultation with representatives of institutions of the Guatemalan State and the United Nations in order to bring the Guatemalan legal system in line with international conventions on human rights.

Article 7. CICIG expenditures

1. The expenditures of CICIG shall be met from voluntary contributions by the international community.

2. The Executive Branch will provide to CICIG the offices and other installations required for CICIG to appropriately carry out its functions.

Article 8. Security and protection of CICIG Staff

1. The Government of Guatemala shall take such effective and adequate measures as may be required to ensure the security and protection of the persons referred to in this Agreement.

2. The Government shall also ensure the security of the victims, witnesses and any other person who cooperates with CICIG for the duration of its mandate and after it completes its work in Guatemala.

Article 9. Inviolability of premises and documents; tax exemptions

1. The premises, documents and materials of CICIG shall be inviolable. The real property, funds and assets of the Commission shall be immune from search, confiscation, attachment, requisition and expropriation.

2. CICIG, its funds, assets, income and other property shall be:

(a) Exempt from all direct taxes. It is understood, however, that CICIG will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services.

(b) Exempt from all types of duties in respect of goods imported by CICIG for its official use. It is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in Guatemala except under conditions agreed with the Government;

(c) Exempt also from import and export duties in respect of its publications.

Article 10. Privileges and immunities of CICIG personnel

1. The Commissioner shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities granted to diplomatic agents in conformity with the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. He shall, in particular, enjoy:

(a) Personal inviolability, including immunity from arrest or detention;

(b) Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction in conformity with the Vienna Convention;

(c) Inviolability of all papers and documents;

(d) Exemption from immigration restrictions and other alien registrations;

(e) The same immunities and facilities in respect of his or her personal baggage as are accorded to diplomatic agents by the Vienna Convention;

(f) Exemption from taxation in Guatemala on his or her salary, emoluments and allowances;

2. International personnel shall enjoy the privileges and immunities granted to experts on missions for the United Nations coming within the scope of article VI of the United Nations Convention on Privileges and immunities. They shall, in particular, enjoy:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and acts done by them in the course of the performance of their mission. This immunity from legal process shall continue to be accorded after the completion of their employment with CICIG;

(c) Inviolability for all papers and documents;

(d) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys;

(e) Exemption from taxations in Guatemala on his or her salary, emoluments and allowances.

3. Privileges and immunities are granted to the Commissioner and officials of CICIG in the interest of the Commission and not for the personal benefit of the individuals themselves. The right and the duty to waive immunity whenever it may be relevant without prejudice to the purpose for which it is granted, shall require, in the case of the Commissioner, authorization from the Secretary-General of the United Nations and, in the case of CICIG staff, authorization from the Commissioner.

4. The Government agrees to provide to CICIG and its personnel the security necessary for the effective completion of CICIG's activities throughout Guatemala, and to protect the personnel of CICIG, whether international or national, from abuse, threats, reprisals acts of intimidation in virtue of their status as personnel, of, or their work for CICIG.

Article 11. Withdrawal of cooperation

The United Nations reserves the right to terminate its cooperation with the State if:

(a) The State fails to provide full cooperation with CICIG in a manner that will interfere with its activities;

(b) The State fails to adopt legislative measures to disband clandestine security organizations and illegal security groups during the mandate of CICIG;

(c) CICIG does not receive adequate financial support from the international community.

Article 12. Settlement of disputes

Any dispute between the parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiation between the parties or by any other mutually agreed mode of settlement.

Article 14. Entry into force

This Agreement shall enter into force on the date on which the State of Guatemala officially notifies the United Nations that it has completed its internal procedures for approval and ratification. It shall have a duration of two (2) years and may be extended by a written agreement between the parties.

Article 15. Amendment

This instrument may be amended by written agreement between the parties.

IN WITNESS WHEREOF, the following representatives, duly authorized by the United Nations and by the State of Guatemala, have signed this Agreement.

Done in the city of New York on 12 December 2006, in two originals in English and Spanish, both texts being equally authentic.

For the United Nations

For the State of Guatemala